

La política se adelanta a 2027: cae Ruffo, Morena pierde respaldo y crecen las tensiones sindicales

La detención del exgobernador Ernesto Ruffo Appel por su presunta participación en una red de contrabando de combustibles sacudió al PAN y a Somos México, mientras Morena enfrenta una caída en su aprobación, disputas internas por candidaturas y llamados al INE para frenar campañas anticipadas. En el sector laboral, trabajadores de salud rechazan el aplazamiento de elecciones sindicales y la CNTE mantiene abierto el conflicto por el futuro de la Usicamm.

La carrera política rumbo a 2027 dejó de ser una competencia discreta. Los partidos ya mueven estructuras, promueven aspirantes y enfrentan conflictos internos, mientras las instituciones electorales reciben presión para intervenir antes de que la ventaja acumulada por algunos actores sea imposible de corregir.

El hecho que marcó la jornada fue la detención de Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California y una de las figuras históricas del Partido Acción Nacional. La Fiscalía General de la República lo acusa de formar parte de la mayor red de contrabando de combustible detectada hasta ahora en México.

De acuerdo con la investigación, la organización introducía gasolina y diésel desde refinerías de Texas mediante carrotaques ferroviarios. Las empresas vinculadas declaraban ante las aduanas cantidades mucho menores a las realmente transportadas o registraban productos distintos para pagar menos impuestos.

En algunos cargamentos se reportaban alrededor de 10 mil litros, aunque los tanques tenían capacidad para transportar hasta 110 mil. La FGR calcula que aproximadamente 15 millones de litros no fueron declarados y que el daño total a la Hacienda pública supera los 4 mil millones de pesos.

La investigación también detectó más de cuatro mil operaciones de importación y movimientos financieros por miles de millones de pesos en cuentas nacionales y extranjeras. La Fiscalía obtuvo 25 órdenes de aprehensión y confirmó la captura de Ruffo y otros presuntos integrantes de la red.

El caso tiene un peso simbólico considerable. Ruffo fue el primer gobernador de oposición en México, luego de ganar Baja California en 1989 bajo las siglas del PAN. Décadas después se integró al consejo consultivo de Somos México, uno de los nuevos partidos nacionales.

El PAN reaccionó con cautela. Su dirigencia pidió respeto al debido proceso y sostuvo que el exmandatario debe aclarar los hechos ante los tribunales. Somos México fue más lejos: exigió su liberación inmediata y calificó la detención como una persecución política.

La diferencia no es menor. Mientras el PAN intenta evitar una defensa sin reservas, Somos México convirtió el caso en su primera gran batalla pública. El riesgo para el nuevo partido es quedar ligado a un expediente penal antes de conocer las pruebas que serán presentadas ante el juez.

La oposición también vinculó la detención con la crisis política de Baja California. Desde hace varios días, la gobernadora Marina del Pilar Ávila enfrenta la filtración de audios relacionados con reuniones y supuestas gestiones ante autoridades de Estados Unidos. Sus adversarios consideran que la captura de Ruffo busca desplazar ese escándalo de la conversación pública.

Hasta ahora, esa afirmación pertenece al terreno político. La detención deriva de una investigación iniciada desde 2025 y relacionada con decomisos de combustible realizados en Coahuila. Sin embargo, la coincidencia de ambos episodios alimenta la percepción de que la justicia y la competencia partidista avanzan sobre el mismo tablero.

Para Morena, el caso representa una oportunidad para demostrar que el combate al contrabando de combustibles también alcanza a figuras opositoras. Pero esa narrativa sólo será sostenible si la investigación se conduce con transparencia y si la Fiscalía actúa con el mismo rigor frente a actores vinculados con el oficialismo.

El partido gobernante también enfrenta sus propios problemas. Una encuesta de Pew Research reportó que Morena mantiene el primer lugar de aprobación, pero cayó de 78% en 2025 a 61% en 2026. La pérdida es considerable, especialmente porque ocurre a un año de las elecciones intermedias.

Movimiento Ciudadano aparece en segundo lugar, con 44% de aprobación. PAN y PRI se mantienen más abajo y no parecen haber capitalizado por completo el desgaste del oficialismo. Esto significa que existe descontento, pero no necesariamente una transferencia directa hacia la oposición.

Morena intenta contener esa pérdida mediante una revisión más estricta de aspirantes y candidaturas. Al mismo tiempo, debe resolver disputas con sus aliados. En Chihuahua, el Partido Verde impulsa al alcalde con licencia de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, mientras el Partido del Trabajo respalda a la senadora Andrea Chávez.

La dirigencia morenista asegura que la alianza permanece unida y que cada partido tiene derecho a promover sus perfiles. No obstante, las diferencias anticipan una negociación complicada. En política, una candidatura mal procesada puede fracturar en semanas lo que tomó años construir.

Las tensiones también llegaron al Senado. Gerardo Fernández Noroña reclama su derecho a competir nuevamente por la presidencia de la Mesa Directiva y acusó al coordinador Ignacio Mier de intentar cerrarle el paso. Aunque el cargo es legislativo, la disputa refleja la competencia interna por visibilidad, liderazgo y posicionamiento nacional.

Fuera de los partidos, un grupo de académicos y especialistas exigió al Instituto Nacional Electoral actuar frente a las campañas anticipadas. Los firmantes señalaron que diversos aspirantes ya realizan eventos, propaganda, recorridos territoriales y promoción digital sin que se conozca con claridad el origen de los recursos utilizados.

El problema es sencillo de entender: algunos competidores ya corren mientras la autoridad todavía no da el banderazo. Si el INE no establece reglas pronto, la elección de 2027 podría comenzar con ventajas acumuladas fuera de los periodos legales.

En el sector sindical, la jornada también dejó señales de conflicto. Trabajadores de hospitales rechazaron el acuerdo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud para aplazar hasta 2029 las elecciones de sus 107 secciones.

Los inconformes sostienen que la decisión limita la democracia interna y prolonga mandatos de dirigentes que, en algunos casos, llevan décadas en el cargo. La dirigencia nacional argumenta que la transición de hospitales hacia IMSS-Bienestar impide contar con un padrón actualizado.

El argumento muestra una consecuencia poco visible de la reorganización del sistema de salud. Cambiar hospitales de una institución a otra no sólo implica modificar presupuestos, administración o servicios; también altera adscripciones laborales, padrones sindicales y formas de representación.

El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje informó que todavía no ha validado formalmente los acuerdos del sindicato. Esto abre la posibilidad de impugnaciones y obliga a la dirigencia a explicar con mayor claridad cómo y cuándo renovará sus estructuras.

El magisterio enfrenta una discusión parecida. La presidenta Claudia Sheinbaum propuso que la consulta para sustituir la Usicamm se realice escuela por escuela y mediante voto

secreto. El objetivo es que participen todos los docentes y no únicamente las organizaciones sindicales con mayor capacidad de movilización.

La CNTE acusa incumplimientos y reclama diálogo directo. El gobierno sostiene que la decisión debe construirse desde los centros de trabajo. En el fondo, la pregunta no es si la Usicamm debe cambiar, sino qué sistema regulará en adelante el ingreso, la promoción y el ascenso de los maestros.

Sin una propuesta concreta, la consulta corre el riesgo de aumentar la incertidumbre. Los docentes necesitan conocer qué opciones estarán sobre la mesa, qué derechos se garantizarán y cómo se evitarán prácticas discrecionales.

En el ámbito del IMSS, otro dato encendió una alerta. Durante junio, más de 190 mil trabajadores retiraron de sus afores un total de 4 mil 199 millones de pesos por desempleo, la cifra más alta registrada para ese mes.

El retiro permite enfrentar una emergencia económica, pero tiene un costo futuro: reduce el ahorro y las semanas cotizadas necesarias para obtener una pensión. Para muchos trabajadores, resolver la necesidad inmediata puede significar llegar a la edad de retiro con menos recursos o con mayores dificultades para cumplir los requisitos legales.

El panorama del día muestra una misma tendencia en distintos frentes: las decisiones de corto plazo están generando costos de largo plazo. Los partidos adelantan campañas y desgastan alianzas; algunos sindicatos prolongan dirigencias para resolver problemas administrativos; y miles de trabajadores utilizan sus ahorros pensionarios para superar el desempleo.

La elección de 2027 todavía no comienza formalmente, pero la competencia ya está en marcha. La diferencia será quién llegue con mejor organización, menos conflictos internos y mayor credibilidad. Porque en política, como en las pensiones, retirar capital demasiado pronto suele salir caro.